

HOY

Edita: La Editorial Católica, Sociedad Anónima (EDICA).
Carretera de Madrid-Lisboa, s/n.º - Badajoz.

Teléfonos: 252511 y 252600 (cuatro líneas). Télex: 28643.

Depósito legal: BA-3-1958 ■ Difusión controlada por OJD.

Redacción y delegaciones en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Mérida.

DIRECTOR: Teresiano Rodríguez Núñez.

REDACTORES JEFES: Luis Angel Ruiz de Gopegui y Santoyo, Manuel García Carmona y Gaspar García Moreno.

REDACCION: Fernando Saavedra Campos, José María Pagador Otero, Manuel López García y Antonio Barquilla Rosas (Badajoz); Fernando García Morales y Marciano Rivero Breñas (Cáceres); José Joaquín Rodríguez Lara (jefe de sección) y José López Aroca (Mérida); José Luis García Martín y Francisco Sánchez Manzano (Plasencia); Manuel Martínez Cordero (Regional); Gabriel Ramírez Soto (Internacional); Domingo Núñez Piriz (Nacional); Enrique García Calderón y Fernando Echave (Deportes); Julián Leal Hernández y Bernardino de la Calle (Diseño y Diagramación); Alfonso Rodríguez y Fernando García Múñez (Fotografía).

GERENTE: Angel Pérez y Pérez.

JEFE DE PRODUCCION: Jesús Muñoz Morán.

JEFE SECCION COMERCIAL: Guillermo Fernández Fernández.

JEFE SECCION ADMINISTRACION: Angel Royano Vera.

REGENTE DE TALLERES: Antonio Piñero Martínez.

Viraje de la política exterior

La anunciada decisión española de participar en la construcción del avión de combate europeo en contra de la actitud francesa y el anuncio del Presidente González a la agencia de noticias china en el que no descartaba que España entrase de algún modo en la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE), o «guerra de las galaxias», se suma al anuncio hecho desde el Ministerio de Industria, no ya de la concesión de seguridades a Norteamérica sobre la no exportación de tecnología a países potenciales rivales bélicos (a propósito del arreglo ATT-Telefónica), sino, lo que resulta mucho más lógico y coherente, del próximo ingreso de España en la COCOM, con sus colegas de la OTAN más el Japón.

Todo esto significa una realista reconversión de nuestra política exterior, con importantes consecuencias en la política económica. La otra actitud posible era la francesa. La conocida popularmente como actitud de «grandeur», creada por De Gaulle, supuso hasta ahora una fuerte insolidaridad gala en sus cuatro principales ámbitos de actuación: el de la CEE, el de la OCDE, el de la OTAN y ahora en las posibilidades que se abren en la IDE. Por supuesto que en toda alianza, y la occidental no iba a ser una excepción, existen decisiones comunes que satisfacen los intereses de un Estado miembro, y otras que los perjudican de algún grado. Sólo al observar la suma algebraica de beneficios y molestias se ve con nitidez si la alianza es positiva o negativa. Pero Francia

trata, mucho más de lo que puede parecer, de conseguir una especie de máximo de los máximos. Todo, de algún modo, debe dejar saldo positivo. Agreguemos que esa línea política francesa no tiene demasiado sentido para los intereses españoles. Primero, porque si la no despreciable potencia gala no impide que Francia roce el ridículo más de una vez en sus deseos de política independiente cuando la de sus aliados no es concorde con sus intereses, la española no permite, desde luego, buena parte de esos pujos de excesivo nacionalismo. Pero, además, ni el torpedeo que antaño sufrió a manos de París la Comunidad Europea de Defensa, ni la actual estructura militar gala al margen en gran parte de la OTAN, ni el deseo de alzar Eureka frente a IDE encaja con los intereses permanentes españoles.

Tres cosas conviene que España consolide de ahora en adelante. Por una parte, una política económica resueltamente europea. En la CEE de ningún modo esto pasa por una especie de endeudamiento con Francia; más bien sucede lo contrario. Se debe completar esto con una política de defensa, lealmente en el marco europeo y occidental y una política de avance tecnológico que permita que la actual situación conseguida por España en estos momentos de la tercera revolución industrial permita algún progreso positivo sobre la situación ya lograda con grandes sacrificios previamente.

Organizar el campo

A felizmente concluida «guerra del tomate» ha colocado en primera línea de actualidad algunos de los problemas que aquejan al sector agrario cuando todavía están recientes las declaraciones oficiales que anuncian un nuevo récord de cosecha en la presente campaña. El enfrentamiento entre agricultores y conservadores ha puesto de relieve que persiste una cierta indefensión del sector primario frente a los potenciales compradores de sus productos, sobre todo cuando éstos, como es el caso del tomate y la práctica totalidad de las frutas y hortalizas, no pertenecen al grupo de los amparados por la regulación oficial.

La solución arbitrada para poner fin a la mencionada guerra es, aunque conocida y habitual en conflictos de este tipo, sumamente reveladora de la dependencia respecto de la Administración, que constituye una de las características de nuestra agricultura. Hay, sin duda, razones de índole histórica, estructurales, económicas y hasta de psicología del hombre del campo que explican la persistencia de tal dependencia, pero no puede, en buena lógica, admitirse que el recurso a los fondos públicos siga funcionando como resorte casi único para solucionar los conflictos entre productores e industriales.

Cuantos tienen algún peso específico en el campo, desde la Administración a las organizaciones agrarias, no cesan de resaltar la necesidad de que los productores se

organicen y agrupen para paliar en la medida de lo posible la dependencia casi absoluta de quienes acuden a ellos para comprar sus cosechas. Aunque sería iluso contemplar esa organización como la panacea para resolver los problemas del sector agrario, no cabe duda de que contribuiría poderosamente a aumentar su capacidad de maniobra frente a los intermediarios y, consiguientemente, a la obtención de mayores ingresos por la venta de sus productos.

No puede olvidarse, en este sentido, que el sector agrario ha sido en buena medida el gran sacrificado en aras del desarrollo industrial español de las últimas décadas, hasta el punto de que su renta es inferior en un 40 por 100 a la renta media nacional. Ni siquiera cuando el clima colabora, como ocurrió en la última campaña y está ocurriendo en la actual, en la que se espera una cosecha que superará en uno o dos puntos porcentuales a la de 1984, el campo obtiene los beneficios que cabría esperar para ir acercando su nivel de renta al de los demás sectores productivos.

Lo que está ocurriendo con los precios del maíz ilustra perfectamente lo caro que resulta al sector no tener una mínima organización comercial. Ciertamente, la actual cosecha, que se situará en torno a los tres millones de toneladas, un nivel impensable hace apenas cuatro o cinco años, es muy superior a la media y parece lógico, por consiguiente, que los precios no sean elevados. Pero lo que resulta incomprensible es que los cultivadores vendan sus cosechas por debajo del precio de garantía que la Administración se comprometió a pagar en su momento. Con independencia de que las multinacionales cerealistas que operan en España estén contribuyendo a derrumbar los precios con la compra de importantes cantidades de maíz en el exterior, no cabe duda de que los agricultores no venderían por debajo del precio garantizado por la Administración si estuvieran organizados y dispusieran de respaldo financiero y una adecuada red de almacenes en los que situar sus cosechas en espera de tiempos mejores. Porque, y este es un dato que no se puede olvidar, España, pese a las excelentes cosechas cerealistas de las dos últimas campañas, sigue teniendo un déficit de cereales para pienso que se sitúa en torno a los tres millones de toneladas.

No hay, pues, razones para que ni la Administración ni el sector agrario se duerman en los laureles de las buenas cosechas o de la mejora de la balanza exterior agraria que, por primera vez en los últimos veinte años, registra signo positivo. A la primera corresponde intensificar los esfuerzos políticos y económicos para que el campo se organice y dependa cada vez menos de las subvenciones estatales de urgencia. Máxime cuando las asociaciones de productores están llamadas a representar un papel protagonista en el funcionamiento del mercado tras la adhesión de España a la CEE. Los hombres del campo y las organizaciones agrarias, a su vez, tendrán que acostumbrarse a desterrar personalismos e individualismos para poner en marcha sus propias organizaciones de mercado, que nadie más que ellos pueden implantar.

LARREY



ESTE PAIS

Umbral autoritario

FERNANDO ONEGA

SE ha organizado una escandalera con la polémica entre don José María Benegas y la patronal CEOE. Es una discusión que se puede resumir en el viejo refrán del «zapatero a tus zapatos». Benegas les dice a los empresarios lo que Franco le dijo a un ministro con problemas: «Haga como yo, no se meta en política». Y los empresarios le contestan lo que ningún ministro le pudo contestar a Franco: «Haga como yo, vigile sus compromisos de Gobierno, y déjeme seguir mi camino».

Esa intromisión en los asuntos públicos sería

normal, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se acepta desde hace muchos años la intervención de los grupos de presión, y los candidatos no son extracciones ideológicas sino emanación de intereses. Pero aquí en España, como en casi toda Europa, todavía creemos en la pureza de la política y del Estado.

No lo justifica, en cambio, una idea elemental de la libertad. ¿Quién es el Gobierno de la Nación para decirle a unos representantes sociales lo que deben hacer? ¿Hasta qué punto es lícito que un Gobierno,

o un partido gobernante señalen límites para la acción pública, indicando hasta dónde pueden llegar las críticas? Si se empieza por decir a los empresarios que no son quienes para analizar la marcha de los asuntos públicos, puede ocurrir que se esté incubando el germen de la negación de la libertad de expresión. Si ese derecho se niega hoy a los empresarios, nadie puede esperar que no se niegue mañana a otros grupos sociales. Por eso, es posible que la patronal se extralimite. Pero las palabras de Benegas nos ponen en el umbral de un modelo autoritario.